

COLOMBIA

POSIBLE EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE SEIS PERSONAS EN EL CASTILLO, DEPARTAMENTO DE META

Abril de 1990

INDICE AI: AMR 23/16/90/s

El 24 de febrero de 1990, seis personas de la comunidad de Medellín del Ariari, próxima a la ciudad de El Castillo, en el departamento de Meta, murieron por disparos en circunstancias que sugieren una posible responsabilidad oficial. Al parecer, un grupo de 15 hombres con uniforme militar y fuertemente armados, acompañados por otros dos vestidos de civil, aprehendieron en sus casas a Bernardino Prieto, de 55 años; a sus hijos Eugenio y Horacio Prieto; a Jacinto Zea, de 60 años, y a su hijo José Antonio Zea, así como a Omery Montoya. Al parecer, los agresores llegaron a la comunidad con una lista de la que leyeron los nombres, uno por uno, de las seis víctimas. Los sacaron de sus viviendas -situadas, según parece, a sólo 15 minutos del cuartel- y las mataron momentos después. Las muertes se produjeron por disparos de ametralladora en la cabeza. Según los informes, poco antes del ataque se había visto a un grupo armado salir de la base militar del 21 Batallón Vargas, adscrito a la Séptima Brigada del ejército, cuya base está en Villavicencio, principal localidad de Meta.

El 21 Batallón Vargas ha aumentado en los últimos meses su control sobre la población local mediante la introducción de medidas de seguridad especiales, como el registro forzoso de los habitantes, restringiendo la circulación de alimentos y medicinas. Por otra parte, los informes indican que también ha efectuado bombardeos aéreos de algunas zonas ocupadas por civiles. En enero de 1989, un grupo de dirigentes comunitarios locales y líderes sindicales presentaron, en una carta dirigida al procurador general de Colombia, una denuncia formal contra el 21 Batallón Vargas, acusándolo de graves violaciones de derechos humanos, como abuso de autoridad, robo, tortura, agresión, daños a la propiedad y de causar pánico deliberadamente en la zona.

Bernardino Prieto, Jacinto Zea y Omery Montoya eran conocidos activistas políticos en la región de Unión Patriótica (UP), coalición legal de izquierdas que, desde su creación en 1985, viene siendo blanco especial de homicidios políticos y desapariciones. Según estimaciones de la propia organización, más de 1.000 activistas de la misma -parlamentarios, concejales municipales, dirigentes sindicales y simpatizantes entre ellos- han muerto violentamente. Muchos otros han desaparecido. La mayoría de los homicidios políticos y desapariciones se han atribuido a grupos paramilitares.

La región de Ariari es escenario de una gran violencia política en los últimos cinco años. El 22 de noviembre de 1986, cuando UP consiguió siete de los 21 representantes municipales de Meta, seis campesinos murieron violentamente en el municipio de Alto Cumeral, acusados de ser simpatizantes de la UP. Según los informes, también fueron sacados de sus casas por un grupo de pistoleros que llevaban uniformes militares. Otra matanza de 17 campesinos del municipio de Caño Sibao indujo a la UP a aliarse con los candidatos liberales en las elecciones locales de El Castillo. En 1988, según la prensa nacional colombiana, un total de 72 campesinos perdieron la vida en una serie de matanzas a manos de fuerzas paramilitares. Se cree que la mayoría eran simpatizantes de UP.

Varios factores contribuyen a la violencia en esta región, como la presencia de narcotraficantes con sus bandas de pistoleros a sueldo ("sicarios"), de grupos paramilitares derechistas y de guerrilleros. En la década de 1970, Meta estaba dominado por el grupo armado de la oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue teniendo su cuartel general allí. Tras el fracaso gradual de la tregua y del proceso de paz iniciado por el gobierno de Belisario Betancur en 1984, la presencia del ejército en la región ha aumentado de forma significativa. Amnistía Internacional ha recibido informes reiterados y congruentes de violaciones masivas de derechos humanos contra la población civil en zonas rurales del país sometidas a operaciones de contrainsurgencia. El gobierno colombiano viene atribuyendo la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos a los grupos paramilitares y a los escuadrones de la muerte, grupos civiles que, según las autoridades, éstas no pueden identificar ni controlar. Sin embargo, existen serios indicios de que muchos de estos grupos actúan bajo la autoridad o con la complicidad de las fuerzas armadas. Los dirigentes de UP han denunciado en reiteradas ocasiones la participación de las fuerzas armadas colombianas en la campaña de intimidación contra sus miembros y han presentado ante el procurador general y las autoridades judiciales datos que, al parecer, implican a miembros de las fuerzas de seguridad en la muerte de sus activistas.

En marzo de 1990 se celebraron elecciones municipales en Colombia y en mayo tendrán lugar las presidenciales. Los delegados de UP han amenazado con retirarse de los comicios en protesta por la violencia que se ejerce continuamente contra sus miembros y por la inhibición del gobierno en la disolución de las fuerzas paramilitares. El 26 de febrero de 1990, a Diana Cardona Saldarriaga, de 30 años, alcaldesa de UP de Apartadó, departamento de Antioquía, un grupo de hombres que se suponía constituía su escolta oficial, la secuestró en el domicilio de sus padres y la mató. Era el tercer alcalde de Apartadó desde 1986, después de la dimisión de sus dos predecesores en el cargo tras recibir amenazas de muerte. Otros seis miembros de UP murieron el 28 de febrero en Unguía, departamento de Chocó, cuando celebraban un funeral simbólico en memoria de Diana Cardona. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el abogado laboralista, senador nacional y candidato presidencial por UP Bernardo Jaramillo Ossa, de 36 años, cuando esperaba un vuelo en el aeropuerto de El Puente, de Bogotá. Pese a la presencia de numerosos guardias de seguridad, los agresores lograron entrar en el edificio sin problemas.

**SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WXCX 8DJ,
GRAN BRETAÑA**
TRADUCIDO POR EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL, ESPAÑA